

GACETA DE LA PAZ

Del 19 al 25 de junio de 2019

- ProgramaRPR

- www.oim.org.co

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con La historia de violencia en Tierralta y las bandas que producen terror; la violencia en Samaniego; el primer informe hecho por víctimas de reclutamiento forzado que llega a la JEP; el reconocimiento de las víctimas de violencia sexual; entre otros.

La historia de violencia en Tierralta y las bandas que producen terror¹

La alteración de la tranquilidad ciudadana en Tierralta, municipio ubicado en el sur del departamento de Córdoba, ha suscitado una serie de hechos como amenazas, desplazamientos y asesinatos de representantes de las comunidades que reclaman derechos a trato digno.

Las invasiones de al menos 5 hectáreas de terreno ubicadas en el centro de Tierralta, se originaron desde hace cerca de cuatro años y han venido creciendo de manera paulatina con la llegada de campesinos que huyen de sus parcelas en las montañas del Nudo del Paramillo por el asedio de las bandas criminales.

Dado lo anterior, la Procuraduría anunció la apertura de investigación disciplinaria en contra del alcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Otero Avilés, y su secretario de gobierno, Wellington Ortiz Naranjo, por presuntas irregularidades en el control del orden público originadas por la invasión de varios lotes en ese municipio, lo que desencadenó la muerte de la líder social María del Pilar Hurtado.

De acuerdo con el ente de control, se “busca determinar la gestión de la administración frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la

líderesa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio”.

Miembros de organizaciones campesinas y comunitarias, como Cordobexia, aseguran que, al no existir una autoridad clara en el manejo de las invasiones, algunos propietarios de esos terrenos se escudan en panfletos amenazantes utilizando el nombre de bandas criminales como las autodefensas gaitanistas de Colombia, para amedrentar a quienes promueven la defensa de un techo propio.

Como se dijo una de las víctimas del problema de invasión en Tierralta fue María del Pilar Hurtado Montaña, quien fue acribillada por sicarios la mañana del pasado 21 de junio cuando se despedía de sus dos hijos menores para salir a trabajar. El hecho de que el crimen haya sido cometido en presencia de sus hijos y cuya evidencia quedó registrada a través de un video casero, despertó la solidaridad con las víctimas de la violencia, especialmente con los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Luego de la muerte de la mujer, quien lideraba a un grupo de personas que promovía la legalización de los predios ocupados, surgieron nuevas amenazas en contra de otros líderes de Tierralta y varios municipios de Córdoba.

La violencia en Samaniego va más allá de las muertes de Paula y Libardo²

Los asesinatos de la personera Paula Rosero y del periodista comunitario Libardo Montenegro, hicieron que los 50 mil habitantes de Samaniego, cerca a la cordillera de Nariño, fueran noticia nacional por unos días. Detrás de esa breve luz noticiosa está un conflicto que, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, no ha hecho sino aumentar. Por ahora no es claro por qué mataron a Paula y a Libardo el 19 de mayo y el 11 de junio, respectivamente, pese a que sus trabajos les daban visibilidad y, más clave aún, eran voceros de sus comunidades. Además, de enero a mayo hubo 12 asesinatos por sicarios en Samaniego, en la zona hay al menos cuatro cocinas de coca y pasa una ruta narco que conecta con ríos hacia el Pacífico.

Por todo eso, en Samaniego la violencia va más allá de los homicidios más visibles. Las autoridades no han determinado las razones de los homicidios de Paula y Libardo. Según supo La Silla Pacífico por una alta fuente que conoce de cerca las investigaciones, aún no es claro que haya sido por sus trabajos. Pero dejan en evidencia que en Samaniego hay una

“escuela del sicariato” en la que por dinero se acaba con la vida de quien incomoda. Y que las anunciadas medidas del gobierno de Iván Duque para proteger a líderes sociales, funcionarios en riesgo y población vulnerable vía el Plan de Acción Oportuna (PAO) lanzado desde el año pasado, no han impactado en terreno.

Junto a Tumaco e Ipiales, Samaniego es uno de los tres municipios en todo Nariño donde los homicidios no han bajado desde la firma del Acuerdo de Paz. En 2017 fueron 38 asesinatos, en 2018 sumaron 22, y en los primeros cinco meses del año van 12, todos con arma de fuego, según la estadística delictiva de la Policía Nacional. A eso se suma la histórica presencia del ELN en la región, que lleva al menos 30 años, cuando crecieron los primeros cultivos de coca. Aunque no pasan de las mil hectáreas, según la ONU, su ubicación entre la cordillera y los ríos que llevan hasta el Pacífico lo convierten en un enclave para el procesamiento de pasta de coca.

¿Por qué están matando a los exguerrilleros?³

Según investigadores de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto, una nueva ola de violencia política sacude al país por cuenta de decenas de asesinatos cometidos contra exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación.

La Fundación Paz & Reconciliación -Pares, ha registrado desde el 24 de noviembre de 2016 a la fecha 102 personas asesinadas que se encontraban adelantando labores de reincorporación a la vida civil en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo roles de liderazgo en sus comunidades por la defensa de la paz, el medio ambiente, la implementación del Acuerdo Final, entre otras. Asimismo, hasta el momento han sido asesinados 26 de sus familiares.

Desde PARES se han propuesto tres hipótesis que podrían dar cuenta de las razones que motivan las agresiones contra los integrantes de FARC y a sus familiares: 1. Saboteadores de la paz o “spoilers”: agentes legales e ilegales que se oponen al proyecto político abanderado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC y también a la implementación del Acuerdo Final de Paz. 2. Ajuste de cuentas: esta hipótesis se divide en dos tipos de escenarios. El primero es que al momento del repliegue de las FARC hacia las zonas veredales, muchas tensiones quedaron sin resolver con otras estructuras armadas ilegales, este es el caso del

Clan del Golfo en Bajo Atrato y del ELN en Arauca y Nariño. El segundo se debería a “vendettas” en el nivel territorial, las cuales se originaron tras los abusos y agresiones contra la población cometidas en su momento por miembros de la extinta guerrilla de las Farc-ep. 3. Reconfiguración territorial: debido a la trayectoria y conocimiento de las estrategias de guerra, del territorio y de negocios ilícitos, múltiples estructuras armadas han querido vincular a exguerrilleros de las Farc-ep para fortalecer sus actividades criminales. Sin embargo, ante la negativa de exguerrilleros se han tomado retaliaciones que han terminado con sus vidas y hasta con la de sus familiares.

La violencia contra exguerrilleros de las FARC-EP tiene un gran impacto en la posibilidad de construir paz y reconciliación. La alta victimización es uno de los incentivos más poderosos para que exguerrilleros reincidan en actividades ilegales y acudan a estructuras criminales para la protección de su vida ante la incapacidad del Estado para garantizarla. La academia y centros de investigación especializados en procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración-DDR han establecido que la falta de seguridad física es la piedra angular que podría marcar el éxito o fracaso de la reincorporación a la vida civil y, a su vez, es un factor en la reincidencia ante la falta de garantías de seguridad.

Primer informe hecho por víctimas de reclutamiento forzado llega a la JEP⁴

En un evento privado, sin medios de comunicación, al que asistieron tan sólo 37 personas, un grupo de víctimas de la Operación Berlín le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el informe 'Operación Berlín, memorias del olvido' en el que relatan las violaciones a los derechos humanos que padecieron luego de ser reclutados por las FARC. Tras su vinculación al grupo armado sufrieron vejámenes como la planificación forzada, los entrenamientos extenuantes y una emboscada del Ejército que acabó con la vida de, por lo menos, 74 menores de edad. En el evento cuatro desvinculados de las FARC le relataron a los magistrados de la sala de reconocimiento, Iván González y Julieta Lemaitre, lo que tuvieron que padecer en la guerra.

Los niños que estuvieron en la Operación Berlín fueron reclutados, en su mayoría, en la zona de distensión, un espacio de unos 42.000 kilómetros entre Meta y Caquetá. Integrada por unos 362 guerrilleros, de los cuales 150 eran menores de edad, la columna móvil Arturo Ruiz partió desde dicha zona hacia el Magdalena Medio. Los niños fueron sometidos a los mismos entrenamientos que los adultos y quedaron bajo el mando de 'Rogelio' quien a su vez recibía órdenes de Víctor Julio Suárez, más conocido como 'El mono joyoy'. "Ellos (las FARC) niegan el reclutamiento forzado,

pero acá estamos nosotros", enfatizó Manuel*, quien agregó que él "cumplía las mismas órdenes que una persona de 30 o 40 años". El joven salió de las filas con un problema en las rodillas por lo que tenía que cargar maletas con sobrepeso.

El informe fue el producto del trabajo de 20 sobrevivientes de la Operación Berlín que se reunieron en Villavicencio el pasado 24 de marzo. Estuvieron acompañados por la organización Benposta Nación de Muchachos. "En este informe reposa nuestro dolor, las lágrimas y el sufrimiento. También están nuestras esperanzas y esperamos que hay justicia", complementó Marcela.

Iván González, magistrado de la sala de reconocimiento de la JEP, invitó a hacer un minuto de silencio por los niños que han muerto en medio de la guerra. "Estos informes son la visión que nosotros podemos tener de los daños que produjo la guerra para saber qué debemos hacer", dijo. Además de agradecerle al grupo de sobrevivientes de la Operación Berlín por entregar el documento, invitó a que más víctimas de reclutamiento forzado hagan llegar sus relatos a esa jurisdicción. "Son las primeras víctimas de reclutamiento que nos traen su informe", recalzó. Y concluyó: "si la guerra de por sí es cruel, cuando esta vincula a los niños ya no queda ningún rastro de humanidad".

Se reconocerá la dignidad de las víctimas de violencia sexual⁵

La Comisión de la Verdad convoca a mujeres y personas LGBT, organizaciones sociales y entidades del Estado en Cartagena para escuchar testimonios de víctimas y reflexionar sobre los impactos de este delito cometido en el marco del conflicto armado.

Como parte de su labor por entender los impactos y dinámicas del conflicto armado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad arranca desde esta semana con una serie de encuentros. El 26 de junio, en Cartagena, se discutirá y reflexionará sobre las violencias sexuales que vivieron mujeres y personas de la comunidad LGBT en la guerra.

Se espera que este encuentro, llamado 'Mi Cuerpo Dice la Verdad', sirva para establecer un diálogo entre instituciones del Estado y víctimas, quienes narrarán sus testimonios sobre las violaciones sexuales a las que se enfrentaron en medio de la guerra, un fenómeno que durante décadas ha

sido, según la Comisión, invisibilizado e incluso manipulado. Diversas mujeres de todo el país participarán en el evento. Afrodescendientes, indígenas, campesinas, urbanas, entre otras, narrarán sus historias a través de diferentes formatos. Por su seguridad y protección, algunas las contarán a través de videos, audios, escritos o a través de otras personas, pues es la primera vez que darán sus testimonios en público. Otras optarán por subirse al escenario del Teatro Adolfo Mejía, donde se llevará a cabo el encuentro.

El encuentro busca visibilizar y reconocer estos crímenes contará con la presencia de varios sectores de la sociedad, incluidos representantes del Gobierno y algunos exintegrantes de la guerrilla de las Farc, los paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, pero no tendrán la palabra, solo escucharán los testimonios.

Tehobromina empieza a vivir su desarrollo ligado a la paz⁶

Esta vereda del municipio de Aracataca, Magdalena, es uno de los primeros sitios de este departamento del norte del país que empieza a ver las Pequeñas Obras de Infraestructura, ligadas a los PDET, pactadas en el Acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC. Atrás está quedando la imagen de una guerra que hostigó de manera reiterada a las comunidades de la zona rural de Aracataca en décadas pasadas y se están erigiendo nuevos referentes gracias, según líderes locales, a la ejecución de obras ligadas a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Ese municipio conforma, junto con Fundación, Ciénaga y la zona rural de Santa Marta, la región de Magdalena que hace parte del PDET de la Sierra Nevada – Serranía del Perijá – Zona Bananera, integrado, además, por ocho poblaciones de departamento de Cesar y tres de La Guajira, a los cuales

se les destinaron 8.6 billones de pesos para invertir en los próximos diez años.

Las comunidades rurales de Aracataca están a la expectativa por cuanto es el primer municipio del Magdalena a donde está llegando la implementación del PDET a través de las obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), concertadas de manera colectiva en diciembre pasado en Valledupar. Algunas de las iniciativas propuestas ya están tomando forma con el desarrollo de proyectos en veredas como Tehobromina, Macaraquilla, Agua Bendita, Río Piedra y Quebrada Seca. En ellas se están estructurando y poniendo en marcha obras de adecuación de vías terciarias, mejoramiento de escuelas y construcción de restaurantes escolares.

Obispos del suroeste del país crean un frente común por la paz⁷

Una de las regiones más golpeadas por el fenómeno de violencia que se desató tras la firma del acuerdo de paz con las Farc ha sido el suroeste colombiano, integrado por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. En varios de esos municipios que integran el pacífico colombiano se ha vivido con mayor crudeza la retoma de los territorios que antiguamente controlaban las FARC, la guerra territorial y las vendettas por el control de rutas para el narcotráfico. Y en medio de ese nuevo conflicto liderado por disidentes, ELN, Clan del Golfo y Los Pelusos, quedaron miles de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Por esa razón, y ante el incremento de las acciones violentas contra los líderes sociales, siete obispos de la región firmaron una carta pública con cinco puntos, en la que manifiestan la intención de conformar un frente común de "servidores por la paz".

La misiva está firmada por los arzobispos de Cali (Valle) y Popayán (Cauca); los obispos de Palmira (Valle), Apartadó (Antioquia), Tumaco (Nariño), Istmina-Tadó (Chocó) e Ipiales (Nariño). "Los obispos católicos del Pacífico y Suroccidente colombiano, reunidos en Popayán, hemos reflexionado sobre el contexto actual que vive la región y el país, y sobre los desafíos que tienen nuestras comunidades para avanzar en la consolidación del proceso de paz", aclaran en la misiva.

La carta contiene cinco puntos que desarrollan temas de actualidad y causan polémica como el relacionado con la posible reactivación del uso del glifosato para la aspersión aérea de los cultivos ilícitos.

Fuentes

El Tiempo disponible en: <https://www.eltiempo.com/>

Verdad Abierta disponible en: <https://verdadabierta.com/>

El Espectador disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias>

Silla Vacía disponible en: <https://lasillavacia.com/>

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: <https://pares.com.co/>